SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 11/2014

Recomendación N°	11/2014
Autoridades Responsables	Elementos de Seguridad Pública del Estado
Expediente	1VQ-474/2013
Fecha de emisión/	19 de junio 2014
HECHOS	
<p>La agraviada V1, de profesión enfermera, manifestó que aproximadamente a las 12:00 horas del 19 de mayo de 2013, fue detenida por dos elementos de la Policía Estatal en el interior de la Clínica Médica 1 de esta Ciudad, con el argumento que la madre de un recién nacido la acusó de haber lesionado al bebe, al momento de practicarle la prueba de tamiz.</p> <p>La víctima manifestó que los agentes aprehensores la llevaron al Edificio de Seguridad Pública del Estado, donde la ingresaron a las celdas preventivas de esa corporación y posteriormente fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común Investigador de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, sin que durante ese lapso de tiempo se le permitiera comunicarse con algún familiar ni con su abogado, no obstante que lo solicitó.</p> <p>Agregó que durante su estancia en los separos, una persona vestida de civil, que no se identificó, le tomó fotografías y sus huellas dactilares, mencionándole que esos datos los requerían para su expediente; sin embargo, el 20 de mayo de 2013 una de las fotografías apareció publicada en dos medios de comunicación impresos, así como en un medio informativo electrónico, afectando con ello su imagen pública y su prestigio como profesionista.</p>	
Derechos Vulnerados	✓ legalidad, seguridad jurídica, intimidad y vida privada
OBSERVACIONES	
<p>En tal sentido, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja 1VQU-474/2013, se encontraron elementos suficientes que permiten acreditar que en el presente caso se vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, intimidad y vida privada de V1, por actos y omisiones atribuibles a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, consistentes en un ejercicio indebido de la función pública por la demora en la puesta a disposición de autoridad competente, por la incomunicación de la que fue víctima, así como por la difusión de una fotografía tomada en instalaciones de esa corporación y sus datos personales, en medios de comunicación impresos y electrónicos.</p> <p>De los elementos de convicción que se recabaron en la investigación del presente asunto, se observó que a las 13:00 horas del 19 de mayo de 2013, V1 fue detenida por AR1 y AR2, elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, cuando se encontraba laborando en la Clínica Médica 1</p>	

de esta Ciudad, donde la víctima prestaba sus servicios, ya que la autoridad informó que mediante llamada al sistema de emergencias 066, se denunció que una enfermera al realizar la prueba de tamiz a un recién nacido, le ocasionó quemaduras en la planta de uno de los pies con una compresa caliente.

En el informe policial homologado, AR1 y AR2, agentes de Seguridad Pública del Estado, precisaron que la detención de V1 se realizó a las 13:00 horas del 19 de mayo de 2013, que fue certificada por médico legista a las 13:44 horas y que una vez elaborada la documentación respectiva, se le puso a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, a las 17:00 horas de ese día.

Respecto de la horas que transcurrieron entre la detención y la puesta a disposición de la víctima ante el Agente del Ministerio Público, la autoridad omitió en presentar argumentos para justificar el retraso, ya que en su informe no adujo los motivos que le impidieron turnar el caso a la autoridad competente, en contravención del párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona detenida deberá ser puesta sin demora a disposición de la autoridad competente, es decir en un plazo razonable.

Para este Organismo Público Autónomo llama la atención la demora injustificada en que incurrieron AR1 y AR2, para dejar a disposición de autoridad competente a la víctima, debido a que los únicos documentos que elaboraron entre la detención y turno del caso a la autoridad competente fueron el certificado médico, parte informativo e informe policial homologado, lo que de acuerdo a la evidencia no revistieron mayor complejidad para su elaboración, sumado a que la distancia que existe entre las instalaciones policiales y la agencia del Ministerio Público, no es lejana, ya que se trata de edificios contiguos.

En otro aspecto, se evidenció que V1 fue víctima de incomunicación, durante el lapso comprendido entre la detención y la puesta a disposición, no obstante que si bien es cierto que la autoridad precisó en su informe que le dieron a conocer sus derechos durante la detención, también lo es que no proporcionó datos fehacientes de que realmente le hayan permitido comunicarse con sus familiares o su abogado, ya que no se encontraron registros de que así ocurrió, ya que solamente se pudo constatar que fue hasta las 21:20 horas del día de su detención, cuando un familiar pudo entrevistarse con ella en el interior de los separos de la Policía Ministerial, al encontrarse a disposición del Ministerio Público.

Por lo que hace a la exhibición de imagen y datos personales de la víctima ante medios de comunicación, se observó que la fotografía presentada en los periódicos "Pulso Diario de San Luis", "San Luis Hoy" y GlobalMedia.mx, fue tomada en las instalaciones de la Policía Estatal ubicadas al

interior del Edificio de Seguridad Pública de esta Ciudad, en la que es visible el logotipo que identifica a la corporación en el fondo de la imagen publicada, lo que corroboró personal de este Organismo Estatal en la visita de inspección que practicó en la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.

Se advierte que fueron servidores públicos de la Policía Estatal quienes tomaron fotografías a V1, que se realizaron en el edificio que alberga la citada corporación y que después fue una de esas fotografías la que aparece publicada en medios de comunicación, lo cual concluyó los derechos humanos de la agraviada a la protección de su imagen y datos personales.

Es de tener en consideración que toda persona tiene derecho a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio y su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación. Los artículos 6º fracción 11 y 16 párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconoce el derecho de toda persona a la intimidad o vida privada, honra y reputación.

No obstante que en el informe de autoridad precisa que se envían boletines a los medios de comunicación, en el caso que nos ocupa se expusieron públicamente datos personales y la imagen de la víctima, en una fotografía de la que se observa cuando estuvo en calidad de detenida en la Dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, motivo por el cual es importante que se inicie una investigación administrativa, para deslindar las responsabilidades, y se tomen acciones efectivas para evitar este tipo de acciones irregulares.

El derecho a la intimidad se asocia con la existencia de un ámbito privado que se encuentra reservado frente a la acción y conocimiento de los demás y tiene por objeto garantizar a toda persona un ámbito reservado de su vida frente a la acción y conocimiento de terceros, ya las autoridades o particulares. También garantiza el derecho a poseer la intimidad a efecto de disponer del control sobre la publicidad de la información tanto de la persona como de su familia; lo que se traduce en el derecho de la autodeterminación de la información que supone la posibilidad de elegir la que deba darse a conocer al público y la que debe permanecer en secreto, así como designar quién y bajo qué condiciones puede utilizarla.

En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado criterio en el sentido de que la toma de fotografías a personas que no han sido puestas a disposición del Ministerio Público en calidad de detenidas o presuntas responsables, configura un acto de molestia, ya que menoscaba o restringe derechos de la persona al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención

de fotografías puede resultar violatoria de los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, el hecho de que la autoridad obtenga fotografías de cualquier persona, sin importar su situación jurídica, efectivamente representa un menoscabo y un deterioro en sus derechos.

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se evite la práctica de exhibir públicamente en medios de comunicación a las personas detenidas que se encuentren bajo su resguardo, que no se les exponga ante la comunidad como culpables, enviando las constancias de cumplimiento.

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda, elabore un proyecto de Manual o Protocolo de Actuación para el tratamiento de las personas detenidas y su puesta a disposición ante autoridad competente, y los presente a la consideración del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

TERCERA. Colabore ampliamente con el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos señalados en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación y proporcione la información respectiva a este Organismo.

CUARTA.- Gire instrucciones al Personal Operativo de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, para que en lo futuro eviten demoras o retrasos injustificados en la elaboración de los Partes Informativos, Informe Policial Homologado y las puestas a disposición de las personas detenidas ante las autoridades competentes, informando sobre su cumplimiento.

QUINTA. Instruya a quien corresponda, que se incluya en el programa de capacitación permanente a los elementos operativos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, el tema de derechos humanos, en particular los derechos que prevalecen durante la detención, los derechos y deberes del policía en el nuevo Sistema de Justicia Penal, enviando constancias de cumplimiento.